



ADMINISTRACIÓN  
DE  
JUSTICIA

## SENTENCIA

Nº 315/2016

En Málaga, a diez de octubre de dos mil dieciséis

Visto, por el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Málaga, don Santiago Macho Macho, el recurso contencioso-administrativo, tramitado como procedimiento abreviado nº 340/2016, seguido para conocer del interpuesto por la Procuradora Sra. Florido Baeza, en nombre de [REDACTED], asistida por el Letrado Sr. Martínez Tello, frente a resolución sobre responsabilidad patrimonial del AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, representada y asistida por la Letrada Sra. Conteras [REDACTED]

### ANTECEDENTES DE HECHO

**Primero.-** El recurso es interpuesto y sustanciado con escrito presentado el 17/06/16, siendo remitido a este Juzgado en reparto realizado el siguiente día 22, y admitido a trámite, una vez subsanado defecto, con resolución de 21/07/2016, que acuerda la tramitación de los autos conforme a las normas del art. 78 de la Ley 29/98.

**Segundo.-** En la demanda es expuesto cuanto es tenido por conveniente para pedir sentencia que declare nulo el acto recurrido y declare la responsabilidad de la Administración Demandada y condene al Ayuntamiento de Marbella a indemnizar con el pago de 1.921,29 €, actualizada con el IPC hasta el momento de la interposición del recurso, más los intereses legales que se devenguen desde la interposición de este recurso en vía judicial y los intereses del art. 106 de la LJCA una vez dictada Sentencia; asimismo, se solicita expresamente la imposición de costas.

**Tercero.-** Recibido el expediente administrativo, la vista del juicio fue el pasado día seis, compareciendo la parte recurrente, que ratifica la demanda. Fijada la cuantía del procedimiento en el importe de la reclamación, practicadas las pruebas que constan en auto y realizadas conclusiones, los autos quedaron para sentencia, constando todo en gabación telemática

**Cuarto.-** En la tramitación del presente recurso contencioso-administrativo se han observado las prescripciones legalmente establecidas.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**Primero.-** El objeto del presente recurso es determinar si se ajusta a derecho la resolución presunta del Ayuntamiento de Marbella, que, en el expediente de responsabilidad patrimonial, 189/13;5, acuerda desestimar la reclamación presentada por la ahora recurrente el 15 de septiembre de 2015, solicitando el pago por los daños en el vehículo matricula [REDACTED] ocurridos el 28 de septiembre de 2014 en la calle Ricardo Soriano.

La parte recurrente alega, en síntesis:

-Que con fecha 28 de septiembre de 2014, el vehículo marca Opel, modelo Astra, con placa de matrícula [REDACTED], propiedad de Da [REDACTED] y asegurado por [REDACTED], tal y como se acredita con la aportación de la póliza de seguro como [REDACTED]

Código Seguro de verificación: QaTD9z97KLxU4F3yYtv8cA== Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 10/10/2016 13:25:54	FECHA	10/10/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	1/6

QaTD9z97KLxU4F3yYtv8cA==



ADMINISTRACIÓN  
DE  
JUSTICIA

documento nº 1, se encontraba debidamente estacionado en la Calle Ricardo Soriano, cruce con Marqués de Linares, cuando la conductora del vehículo con placa de matrícula [REDACTED], quien circulaba por las inmediaciones citadas, observa unas vallas en la vía, de las cuales, al carecer de iluminación y señalización, se percata cuando ya se encuentra muy próxima a estas, teniendo que frenar de forma repentina, lo que junto al hecho de que el pavimento se encontraba mojado por lluvias, pierde el control de su vehículo saliéndose de la vía y colisionando con varios automóviles estacionados, entre los que se encontraba el vehículo propiedad de la asegurada de mi mandante, provocándole daños materiales.

-Que interesa esta parte hacer mención al hecho de que en el lugar se personaron los agentes de la Policía Local de Marbella con carnet profesional nº [REDACTED] quienes a la vista de lo sucedido, cumplimentaron las Diligencias Previas nc 1.814, las cuales aportamos como documento nº 2,

En dichas diligencias, la Policía Local expone en el apartado de "OBSERVACIONES" que, las vallas pertenecen al Ayuntamiento y que han sido colocadas para señalar un evento deportivo, así como también se hace constar:

"Que la conductora del vehículo A, no se percata debido a la carencia de señalización vertical y luminosa previa de un vallado puesto a modo de señalización porevento deportivo (tampoco hay conos) [...]"

Expuesto lo anterior, la imputación de responsabilidad debe ir claramente dirigida al Ayuntamiento de Marbella, en tanto en cuanto es este quien ordena y permite la colocación de las vallas en unas condiciones tales que mermaban la seguridad del tráfico en la vía donde se encontraban instaladas.

-Como consecuencia del siniestro descrito anteriormente, al vehículo asegurado por mi mandante se provocaron daños en la aleta delantera y trasera izquierda, en las puertas trasera y delantera izquierda, en la puerta delantera derecha, parachoques delantero y trasero, en el espejo interior izquierdo y en la llanta y neumático delantero izquierdo, tal y como consta en el informe pericial realizado por D. [REDACTED] y que aportamos como documento nº 3. En el informe mencionado se establece una valoración de los daños cuyo importe asciende a la cantidad de 1.921,29 EUROS.

-Interesa a esta parte dejar constancia de que mi representada ha asumido desembolsado íntegramente el coste de la reparación del vehículo siniestrado, acreditando tal extremo con la aportación de la factura nº 5763, emitida por el taller donde se reparó el vehículo, como documento nº 4, así como con el justificante de la transferencia bancaria realizada en concepto de pago de la mencionada reparación, el cual adjuntamos como documento nº 5.


La parte recurrida alega, en síntesis:

-La valla fue puesto por el Ayuntamiento por que el domingo por la mañana había una maratón, la misma no señalizaba obra alguna, por lo que no debía estar iluminada, como si previene para dichos supuestos el decreto autonómico 72/92.

-No existe nexo causal puesto que daño fue causado por un conductor que no observó la presencia de la valla, y con la lluvia fue contra el vehículo de asegurado por la reclamante.

**Segundo.-** El sistema legal de responsabilidad de la Administración responde a una cláusula general de responsabilidad, art. 139 Ley 30/92 y cc, cuya finalidad, en palabras de la más autorizada doctrina, no es convertir al sistema en un puro régimen de causalidad material, en el que el único elemento relevante de imputación sería el nexo causal entre la acción administrativa y el daño resultante, sin atención alguna hacia cualquier criterio legal de imputación,

Código Seguro de verificación: QaTD9z97KLxU4F3yYtv8cA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 10/10/2016 13:25:54	FECHA	10/10/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	2/6
			
QaTD9z97KLxU4F3yYtv8cA==			



ADMINISTRACIÓN  
DE  
JUSTICIA

convirtiéndose el sistema en una gigantesca máquina de aseguramiento social frente a todo tipo de daños conectados a una actuación administrativa.

Lo que realmente hace la cláusula general, sin excluir en modo alguno la exigencia de una causalidad o imputación del hecho dañoso a la Administración, que excluye sin más el reconocimiento de que su responsabilidad haya pasado a ser general y objetiva es desplazar el elemento básico de la ilicitud del daño desde la conducta del responsable a la situación del patrimonio de quien sufre el perjuicio, el cual deberá justificar que "no tiene el deber jurídico de soportar" dicho daño, en los términos del art. 149 de la Ley 30/92, para poder justificar su pretensión reparadora, giro al que convencionalmente se ha llamado "objetivación" de la responsabilidad patrimonial de la Administración, introduciendo un cierto equívoco innecesariamente, pues no se quiere decir, obviamente que cualquier perjuicio económico que pueda resaltar de los servicios administrativos tenga causa jurídica para pretender una reparación. La cláusula lleva ínsitos unos criterios normativos de imputación -ilegalidad, culpa subjetiva, culpa objetiva, riesgo y sacrificio especial- que no pueden ser utilizados indistintamente para cualquier tipo de actividad administrativa y ante cualquier evento dañoso, de suerte que si el daño no fuere imputable a la Administración a título de anormalidad del servicio público siempre sería posible tal imputación a título de riesgo o de sacrificio especial.

En la generalidad de los casos, las actividades jurídicas o materiales que la Administración lleva a cabo no son en sí mismas peligrosas ni creadoras de situaciones de riesgo patrimonial, y por ello, si se realizan bajo pautas de normalidad, los eventuales daños resultantes no le son en modo alguno imputables; únicamente su prestación anormal, irregular o deficiente puede operar como criterio legal de imputación de tales daños a la Administración.

Sólo el supuesto de daño producido por actuación de un riesgo creado por la Administración en su propio interés es, en realidad, como ocurre de no muy diferente manera en las situaciones de derecho civil estricto, es el único caso de una responsabilidad patrimonial de la Administración estrictamente objetiva, de causalidad material. Se trata, en este último supuesto, de daños excepcionales derivados de peligros o riesgos que ocasiona la actividad administrativa, en que el título de imputación por riesgo operará siempre que el hecho determinante del daño se hubiera producido, pese a haberse adoptado todas las medidas reglamentarias de seguridad -en otro caso, de haber incumplido las medidas de seguridad el título de imputación sería el funcionamiento anormal-.

Conforme a reiterada jurisprudencia, como la SSTS 1747/2011, de 4 abril 2011, Recurso: 3284/200, FJº 5º, de 23 mayo 2014, recurso 5998/2011 FD 3º, o la de 7 noviembre 2014, recurso 439/2012, FD 4º, que la viabilidad de la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración requiere conforme a lo establecido en el art. 139 Ley 30/92 : a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta.

Añadiendo la misma sentencia que la jurisprudencia de esta Sala (por todas la STS de 1 de julio de 2009, recurso de casación 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) insiste en que "no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la

Código Seguro de verificación:QaTD9z97KLxU4F3yYtv8cA==, Permite la verificación de la Integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 10/10/2016 13:25:54		FECHA	10/10/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	QaTD9z97KLxU4F3yYtv8cA==	PÁGINA	3/6

  
QaTD9z97KLxU4F3yYtv8cA==



ADMINISTRACIÓN  
DE  
JUSTICIA

actuación administrativa". Avanzando más en esa misma línea reiterada jurisprudencia ( STS de 25 de septiembre de 2007, rec. casación 2052/2003 con cita de otras anteriores) manifiesta que la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. Se insiste en la STS 19 de junio de 2007, rec. casación 10231/2003 con cita de otras muchas que "es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesa del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público.

Insiste la STS 19 de junio de 2007 , rec. casación 10231/2003 con cita de otras muchas que "es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesa del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público ( Sentencias, entre otras, de 21 de marzo , 23 de mayo , 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995 , 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 de noviembre de 1998 , 20 de febrero , 13 de marzo y 29 de marzo de 1999 )".

Por otra parte, en cuanto a la relación causalidad, dice STS 2070/2011, 15 abril 2011, Recurso: 1993/2006, Recurso: 1993/2006, FJ9 °, o la de 17 diciembre 2013, recurso 4256/2011: es de recordar que constituye jurisprudencia consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación, o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2005, la carga de la prueba del nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la Administración por lo que no habiéndose producido esa prueba no existe responsabilidad administrativa. En el sentido expresado, la sentencia de 15 de junio de 2010 -recurso de casación 5028/2005 -.

**Tercero.-** Proyectadas las anteriores consideraciones sobre el caso de autos, la acción u omisión administrativa con la que trata de conectarse el supuesto daño producido se insertaría en la materia de competencia local a que se refiere el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que comprende el mantenimiento de las vías públicas en condiciones adecuadas para su utilización, que se conecta con la previsión del art. 54 de la misma Ley 7/1985, al establecer que "Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa" y en línea con esto, el art. 223 del RD 2568/86, de 28 de noviembre que aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales dispone que "Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación, en ejercicio de sus cargos, de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa".

Por su parte, el art. 3.1 del RD 1372/1986 , que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que "1. Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local".

Por tanto, el actuar administrativo debe procurar el mantenimiento de las condiciones mínimas y elementales de seguridad de las calles y paseos públicos locales, toda vez que es inexcusable de

Código Seguro de verificación:QaTD9z97KLxU4F3yYtv8cA== Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 10/10/2016 13:25:54	FECHA	10/10/2016
ID FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	4/6



QaTD9z97KLxU4F3yYtv8cA==



ADMINISTRACIÓN  
DE  
JUSTICIA

mantener tales vías públicas abiertas a la circulación peatonal y viaria, en condiciones tales que la seguridad quienes las utilizan esté norma cuanto a los aspectos materiales de mantenimiento de esas vías para su fin específico, sin que sea permisible que presenten dificultades u obstáculos a la normal circulación peatonal tales como agujeros, depósitos de arena, u otros materiales, etc., sin que por lo menos estén adecuadamente señalizados o con la adopción de las medidas pertinentes para la prevención, en tales casos, de posibles eventos dañosos.

En este sentido, la pavimentación de vías urbanas y mantenerlas libres de obstáculos, responde a la necesidad no sólo de garantizar unas objetivas condiciones de salubridad del entorno urbano, sino también de garantizar condiciones objetivas de seguridad; seguridad para el tránsito de vehículos y seguridad para el tránsito de las personas. Esta competencia municipal debe entenderse como servicio público, rechazándose la inclusión dentro del ámbito del artículo 106 de la Constitución Española un concepto estricto de servicio público.

Quedando dicho en el fundamento jurídico precedente que la carga de la prueba es de la parte recurrente, al caso de autos, que el vehículo asegurado por la recurrente sufrió daños el 28 de septiembre de 201, que se encontraba debidamente estacionado en la Calle Ricardo Soriano, cruce con Marqués de Linares, al ser golpeado por el vehículo con placa de matrícula [REDACTED] queda acreditado con las diligencias a prevención realizadas por la Policía Local de forma inmediata a los hechos: 28/09/14 a las 7,15 horas -folios 22 a 29 del expediente-, siendo colocada la valla, según señalan las diligencias, por evento deportivo, manifestando la conductora de dicho vehículo que observó la valla, sin iluminación, frenó y se le fue el coche por que el suelo estaba mojado por la lluvia. En el expediente no obra informe del parecer de los agentes, que si obra en la copia aportada con la demanda. A su criterio la conductora no se percata de la valla al no estar señalizado, ni verticalmente, ni luminosamente, ni con conos, y al ver el vallado cerca frena, y pierde el control del vehículo al estar el suelo mojado.

Con los hechos referidos hay una ruptura del nexo causal por intervención de tercero, que con su actuación causa materialmente el daño, y no adecuo su conducción a las condiciones de la vía, mojada por la lluvia, pero en tramo recto y amplio, según es de observar en el croquis unido a las diligencias policiales, no constando malas condiciones de visibilidad, por lo que pese a percatare la presencia de la valla y frenar, no puedo eludirla, con infracción de lo dispuesto en el artº 45 del Reglamento General de Circulación aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.

En consecuencia, el recurso debe ser desestimado.

**Cuarto.-** Conforme previene en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, tras la reforma por Ley 37/2011, en vigor desde el 31 octubre 2011, procedería imponer costas a la parte recurrente, pero la inexistencia al acto del juicio de la Administración, determina la no imposición.

En atención a lo expuesto,


#### FALLO

**Primero.-** Desestimar el presente recurso interpuesto en nombre de [REDACTED] [REDACTED].

**Segundo.-** Sin imponer el pago de las costas del juicio.

Código Seguro de verificación:QaTD9z97KLxU4F3yYtv8cA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 10/10/2016 13:25:54	FECHA	10/10/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	5/6



QaTD9z97KLxU4F3yYtv8cA==



ADMINISTRACIÓN  
DE  
JUSTICIA

Así lo acuerdo y firmo. don Santiago Macho Macho, Magistrado-Juez del Juzgado Contencioso-Administrativo n º 5 de Málaga y provincia, de lo que yo la Secretaria, doy fe.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso de apelación

Código Seguro de verificación:QaTD9z97KLxU4F3yYtv8cA==, Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 10/10/2016 13:25:54	FECHA	10/10/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	6/6
			

QaTD9z97KLxU4F3yYtv8cA==